Mejores Políticas Públicas # Argentina 2
Ricardo López Murphy (ed.), Enero 2015

Revolución Educativa: Es Hora de Terminar con el Tabú
Págs. 133-142.
Por Edgardo Zablotsky[1]

"Argentina forma parte del mundo, es hora de reconocerlo, de dejar de comportarnos como el avestruz y de aprender de quienes hacen las cosas mejor que nosotros". Esta frase cierra la nota, *Educación: las dos caras de la moneda*, publicada en este mismo volumen, en la cual comparo nuestra realidad educativa con el discurso oficial sobre la misma, ejemplificando una y otra vez la disociación entre ambas, pues no es posible revertir la realidad si no comenzamos por admitir que el discurso oficial poco tiene que ver con ella.

En dicha nota ilustramos como Chile siempre ha obtenido mejores resultados que Argentina en las distintas ediciones de los exámenes PISA, convirtiéndose en la ronda 2012 en el país latinoamericano de mejor performance en cada una de las tres áreas de la evaluación. También resaltamos como el ministro de Educación de turno, ya sea Daniel Filmus, Juan Carlos Tedesco o Alberto Sileoni, se ha visto en la necesidad de justificar nuestra diferencia de performance respecto al país vecino.

Es hora de dejar de criticar a Chile y estudiar una de las principales características de su sistema educativo: el voucher, el cual ha perdurado por más de 30 años y posiblemente sea sólo un recuerdo al llegar a manos del lector este volumen, en virtud de la reforma que ha lanzado la Presidente Michelle Bachelet.

¿En qué consiste el sistema de vouchers educativos y por qué habría de mejorar la educación, tanto pública como privada? En su libro Capitalismo y Libertad, su gestor, Milton Friedman lo explica con claridad, "El sistema que tendría más justificación sería una combinación de escuelas públicas y privadas. Los padres que decidieran llevar a sus hijos a colegios particulares recibirían del Estado una cantidad igual a la que se calcule como costo de educar a un niño en la escuela pública," agregando más adelante: "Otra ventaja de este sistema es que aumentaría la competencia, de esta forma se fomentaría el desarrollo y la mejora de todas las escuelas".

Sería función del Estado establecer los estándares de enseñanza requeridos para que una escuela califique para el programa y funcionar como organismo de contralor al

[1]Vicerrector, Universidad del CEMA.
Email: eez@cema.edu.ar , web page: www.cema.edu.ar/u/eez , twitter: @edzablotsky

cual cada escuela presentaría sus vouchers y obtendría a cambio el subsidio correspondiente. De esta forma el Estado continuaría financiando a la educación, pero los fondos no se asignarían a las escuelas sino a los padres de los alumnos.

La idea, como toda buena idea, es simple, el Estado seguiría subsidiando a la educación, pero los recursos no se asignarían a la oferta de la misma, las escuelas, sino a la demanda, los alumnos. La diferencia no es menor. Un sistema de vouchers cambiaría la relación entre los padres y las escuelas. Al poder elegir a que escuela van a enviar a sus hijos, los padres comenzarían a percibirlas como proveedoras de un servicio, la educación y estarían en una mejor posición para demandar la excelencia del mismo. La competencia necesariamente elevaría el nivel de las escuelas tanto públicas como privadas.

En Chile el voucher se instauró en 1980, se mantuvo, con diversas modificaciones, durante los gobiernos de la Concertación y el de Sebastián Piñera pero, a dos semanas de haber iniciado su segundo mandato, Michelle Bachelet comenzó a recorrer el camino para eliminarlo enviando al Congreso una reforma educativa que garantiza el fin del lucro en las escuelas subvencionadas.

El diseño del sistema es en muchas formas similar al propuesto por Friedman. Coexisten escuelas públicas y privadas, el gobierno entrega a la escuela el valor del voucher correspondiente al alumno que la ha elegido y, por supuesto, monitorea la calidad de la educación. Los estudiantes rinden exámenes estandarizados, los promedios de cada escuela son publicados anualmente y los padres pueden compararlos con los de otras escuelas cercanas, de tal forma que la competencia entre las escuelas garantiza la calidad de la educación.

En abril de 2014, Claudio Sapelli, Director del Instituto de Economía y Profesor Titular de la Universidad Católica de Chile, publicó una interesante nota en *La Tercera*, el periódico de mayor tiraje del país vecino. En la misma postulaba que “algo está mal en el análisis cuando un país que va ganando terreno en la educación, como Chile, pretende adoptar el sistema del país que lo está perdiendo, Uruguay”.

Al fin y al cabo, hace 30 años quién hubiese pensado que hoy el sistema educativo chileno, con todos sus problemas y defectos, se convertiría en el mejor de América latina, tanto en términos de calidad, como lo demuestran los resultados alcanzados en los exámenes PISA, como de cantidad, al tener las más altas tasas de graduación de la escuela secundaria entre los países de la región. Es claro que en Chile algo se debe haber hecho bien para haberse convertido, como bien señala Sapelli, en el segundo país

del mundo que en los últimos años registró un mayor progreso en términos de calidad educativa.

Uruguay es un país considerablemente más equitativo que Chile, si es a la distribución del ingreso a lo que nos referimos; pero he aquí lo que muy pocas veces es reconocido: el sistema educativo chileno es claramente más equitativo que el uruguayo pues logra revertir una foto de mayor desigualdad en los ingresos de los padres en otra de menor desigualdad en la educación de sus hijos, evaluándola en función de los resultados de los exámenes PISA.

Aparentemente resulta fácil de olvidar que Chile ha sido uno de los pocos países de la región que en los últimos 20 años ha logrado reducir la brecha educativa entre el 20% más rico y el 20% más pobre de la población. Qué mejor ilustración de este hecho que el reporte en 2007 del Consejo Asesor para el Trabajo y la Equidad de la misma Presidente Bachelet, el cual señalaba que de los 500.000 estudiantes que se encontraban matriculados en Universidades chilenas, 7 de cada 10 eran los primeros miembros de su familia en acceder a ese nivel de educación.

Por ello resulta lícito preguntarnos que si Chile ha hecho semejante progreso en el terreno educativo, ¿por qué existe tanto descontento interno, tantas demandas de un cambio radical? En palabras de Sapelli: “Algo curioso de la actual cruzada refundacional es que pretendería cambiar al sistema chileno por uno que se pareciera mucho más al uruguayo; un sistema en que los establecimientos educacionales que reciben dinero público no reciben dinero privado y los que reciben dinero privado no reciben dinero público”.

Probablemente la respuesta más razonable nos la provea el galardonado escritor chileno Jorge Edwards, Premio Cervantes de Literatura, quien años atrás, frente a las manifestaciones estudiantiles contra el gobierno del por entonces Presidente Sebastián Piñera, señaló en una nota en el periódico español *El País* que “los estudiantes chilenos hablan de treinta años de retroceso en el país y proponen un cambio equivalente a una revolución. Tienen motivos para estar descontentos, pero usan ese lenguaje del todo o nada que parece nuevo, y que sin embargo se repite de generación en generación” y agregó: “El problema consiste en que las mejoras duraderas que están a nuestro alcance se construyen con paciencia, con razones en lugar de retórica. Sin borrarlo todo y partir de cero, sin creer en los paraísos en la tierra, que suelen desembocar en infiernos”.

En los países del primer mundo un gobierno construye a partir de donde culminó el anterior; por supuesto, diferenciándose de su predecesor, realizando cambios, por

ejemplo, de políticas educativas, pero no afirmando que absolutamente todo lo realizado está mal y que el rol de su gobierno será retrotraerlo a fojas cero. La realidad educativa chilena parece ser mejor descripta por Edwards.

Ojalá no termine siendo este el caso, de ser así me atrevo a predecir que expresiones como la década perdida en el terreno educativo dejarán de ser apropiadas tan sólo para describir nuestra propia realidad, sino que podrían llegar a aplicarse al país vecino.

Es hora de retomar el término voucher educativo, el cual tiene una interesante connotación en si mismo. La Real Academia Española define el término tabú como la "condición de las personas, instituciones y cosas a las que no es lícito censurar o mencionar". Es claro que en educación es posible ilustrarlo justamente mediante los vouchers. El potencial costo de mencionarlos es ilustrado, por ejemplo, por la comedia de enredos que cerró la campaña electoral uruguaya días antes de la primera vuelta, la cual habría de consagrar virtualmente Presidente a Tabaré Vázquéz.

Por años la coalición de izquierda del Frente Amplio se ha opuesto a un sistema educativo que permita a los padres elegir la escuela a la que concurrirán sus hijos, independientemente de sus posibilidades económicas, argumentando que el mismo subvencionaría la educación privada en perjuicio de la educación pública.

El 21 de octubre de 2014 Tabaré Vázquez resaltó en una entrevista televisiva la posibilidad de otorgar vouchers a estudiantes para asistir a instituciones privadas. Afirmó que accederían al beneficio quienes quieran y lo merezcan, tras una evaluación del Ministerio de Educación. Aclaró que no había una cantidad estimada de beneficiarios.

Tabaré inmediatamente se encontró bajo fuego amigo. El sindicato docente no tardó en oponerse, igual recepción encontró dentro de su partido. Mientras tanto, su candidato a vicepresidente, Raúl Sendic, intentaba calmar las aguas al afirmar que "el voucher es una herramienta transitoria que permitirá mantener una cobertura donde la infraestructura de la educación pública no está desarrollada, pero la gran apuesta es a la educación pública".

Por su parte, la oposición presentaba una foto tan confusa como el oficialismo. El candidato a la vicepresidencia del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, acusó a Tabaré de proponer un modelo neoliberal: "Vázquez ha confesado que quiere privatizar la educación pública, a la chilena, porque eso significa el sistema de bonos o vouchers.

Nosotros vamos a defender la educación pública, no como Vázquez y el Frente Amplio que [casi] renuncia a ella, apostando a agrandar la brecha entre lo privado y lo público".

Sin embargo, como señala el senador por el Partido Nacional, Gustavo Penadés, la propuesta de Tabaré "es una vieja idea del Partido Nacional de las campañas de 1994 y 1999". Es más, no es necesario siquiera remontarse a los 90 para encontrarla entre las propuestas de dicho partido. En la pasada campaña de 2009 su referente en educación había declarado que "para revertir la desigualdad de la educación pública uruguaya se debía recurrir a los vouchers" y en 2014 el asesor del candidato a presidente Luis Lacalle Pou, Juan Dubra, defendió el modelo chileno de vouchers, resaltando que "este es otro ejemplo de una política efectiva en educación, que Uruguay ha decidido ignorar".

Frente a la magnitud de la disputa interna, Lacalle twitteó que "la versión de Jorge Larrañaga sobre los vouchers es la que sostiene el Partido Nacional y su equipo de educación".

Por su parte Tabaré, bajo fuego cruzado con una oposición que prefiere olvidar que alguna vez propuso la misma idea, el sindicato docente y su propio partido, aclaró en una nueva entrevista del 23 de octubre que su propuesta sería aplicada en no más de 30 casos excepcionales, dado que el principal compromiso del Frente Amplio es fortalecer la educación pública a la cual "le da preferencia absoluta".

¡30 niños! A tres días de una elección presidencial Tabaré Vázquez debió dedicar su tiempo a explicar que su comentario sobre los vouchers estaba dirigido, como mucho, a 30 niños ¡Un absurdo!

Es claro que la sola mención del voucher es tabú, a pesar que aseguraría la igualdad de oportunidades, más allá de la cuna, al permitir que todas las familias pudiesen elegir entre escuelas públicas y privadas, independientemente de sus posibilidades económicas.

El sistema no atentaría contra la educación pública, sino todo lo contrario. Ninguna familia estaría obligada a dejar de enviar sus hijos a una institución pública; de hacerlo, es porque opina que la alternativa privada elegida provee mejores servicios educativos.

¿Entonces, por qué no considerarlos? Al fin y al cabo los mismos legisladores que en nuestro país se oponen siquiera a evaluar el tema gozan de prerrogativas conceptualmente similares. Veamos un sencillo ejemplo.

Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 16, nos recuerda que todos los habitantes son iguales ante la ley: "La Nación Argentina no admite prerrogativas de

sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas". Sin embargo, nuestra realidad no siempre parece satisfacerlo.

Es bien sabido que los miembros del Senado no sólo cobran su dieta, sino que también cuentan con 20 pasajes aéreos mensuales y 10 terrestres para regresar a sus hogares, independientemente del distrito al cual representan. En la práctica, numerosos Senadores hacen uso de su derecho a canjear pasajes por dinero en efectivo, dado que no utilizan la cuota que tienen asignada, incrementando de esa forma su salario.

Es razonable asumir que cualquier Senador prefiere esta flexibilidad a no tener otra opción que utilizar los pasajes o perder el valor de los mismos, de sobremanera aquellos que habitan en la CABA o en distritos cercanos, o quienes se trasladan a sus distritos en automóviles del Senado y, por ende, no utilizan su cuota mensual de más de $ 16.000 en pasajes.

¿No tomaría Ud. la misma decisión? Por supuesto que yo sí. Preferiría sin dudas recibir un subsidio de 16,000 $, gastar parte de él en los pasajes aéreos que requiriese, a la tarifa más económica a la que pudiese acceder y el resto lo aplicaría a la adquisición de otros bienes que desease o al ahorro.

La conducta de los Senadores es por completo racional; nunca nadie puede estar peor por recibir un subsidio en efectivo y gastarlo a su libre albedrío, que por recibir un derecho equivalente, ejemplificado en este caso por los pasajes aéreos.

¿Si los Senadores tienen el derecho a elegir el uso a darle a este subsidio, por qué el resto de los ciudadanos no tenemos derechos similares? Sin embargo, el resto de los ciudadanos carecemos de esta misma flexibilidad en numerosas instancias, la educación es un claro ejemplo de ello.

En bien sabido que en los últimos años numerosas familias han optado por enviar sus hijos a escuelas privadas, a pesar de la existencia de la educación pública gratuita. La evidencia nos exime de cualquier comentario; aún en barrios muy humildes muchas familias realizan importantes esfuerzos económicos para que sus hijos cursen su escolaridad en este tipo de institución.

Es claro que cada ciudadano que toma esta decisión debe pagar dos veces por la educación de sus hijos, una a través de sus impuestos y otra a través del pago a la escuela elegida, dado que no cuenta con la misma prerrogativa que los Senadores de la Nación.

Si le preguntamos a un padre de niños en edad escolar si prefiere el actual sistema de educación pública gratuita o recibir un subsidio que le permita elegir la escuela a la que desee enviar a su hijo, ya sea pública o privada, religiosa o laica, su respuesta debería ser tan obvia como lo es la conducta de los Senadores.

Nadie podría estar peor por tener la posibilidad de elegir, todo padre que desease optar por una educación distinta para sus hijos, a la que hoy no tiene acceso por sus restricciones económicas, podría hacerlo y quien prefiriese que concurriesen a la escuela pública a la que asisten actualmente también podría hacerlo.

Sería interesante llevar a cabo una estadística entre los legisladores respecto al tipo de escuela en la cual cursan la educación obligatoria sus hijos. Probablemente descubramos que una gran mayoría elige educarlos en escuelas privadas mientras coartan el derecho de muchos compatriotas de tomar una decisión similar, al no promover una legislación que elimine la distorsión que representa pagar dos veces por la educación de los niños, en los casos en que sus padres opten por escuelas de gestión privada.

Por ello resulta pertinente aquella cita de Milton Friedman, publicada en el New York Times Magazine, 1975: “Yo culpo a las personas bien intencionadas que envían sus hijos a escuelas privadas e imparten cátedra a las "clases inferiores" (comillas en el original) sobre la responsabilidad de enviar sus niños a escuelas estatales en defensa de la educación pública”.

Otro tiempo, otro lugar, pero ¿no es una adecuada descripción de nuestra realidad? El mismo Friedman en su clásico libro “Libertad de Elegir,” relata un cuento que nos exime de cualquier comentario. Dice Friedman:

Imaginemos un país donde los ciudadanos siempre han estado orgullosos de la amplia disponibilidad de educación para todos y del rol jugado para ello por la educación pública.

Imaginemos que en los últimos años su realidad educativa se ha visto empañada. Los padres se quejan de la disminución de la calidad de la educación que reciben sus hijos y muchos están aún más preocupados por los peligros para su integridad física en los colegios. Los maestros se quejan que la atmósfera en la que están obligados a enseñar a menudo no es propicia para el aprendizaje, es más, un número creciente de docentes temen por su seguridad, incluso dentro del aula. Casi nadie sostiene que las escuelas están dando a los niños las herramientas que necesitan para desarrollarse en la vida.

Imaginemos que ese país no escatima recursos en educación pero que a la vez el número de alumnos en las escuelas públicas decrece, tanto como la calidad de la educación que reciben; esa evidencia surge de su rendimiento en exámenes estandarizados asociables a las actuales evaluaciones PISA. Es claro que el input en educación en aquel país se ha elevado pero el output ha disminuido.

Imaginemos ahora que en algunas regiones la calidad de las escuelas varía considerablemente, sobresaliente en algunas zonas, o aún en barrios privilegiados de algunas ciudades, increíblemente mala en zonas más humildes. Aquellos ciudadanos cuyas posibilidades económicas les permiten elegir dónde vivir pueden hacerlo en base a la calidad de las escuelas públicas de la región; por supuesto, también tienen la libertad de enviar sus hijos a escuelas privadas pagando dos veces por su educación, una en impuestos para solventar el sistema de educación pública, otra en la cuota del colegio elegido. Por su parte, aquellos que viven en las zonas más humildes pueden pagar por la educación de sus hijos sólo a costa de grandes privaciones; sin embargo, un número sorprendente elige hacerlo enviando sus hijos a escuelas religiosas.

La tragedia de este país es que un sistema educativo diseñado para dar a todos los niños igualdad de oportunidades en la práctica ha exacerbado la estratificación de la sociedad.

Lo curioso, dice Friedman, es que este país existió, no es otro que USA en la década de 1970 y utiliza el cuento como un disparador para su propuesta de un sistema de vouchers educativos. Más curioso aún es el parecido con la realidad educativa que hoy nos toca vivir. Por ello, ¿por qué no evaluar la aplicabilidad de su idea a nuestra realidad?

Es claro que esta clase de propuesta parte del supuesto que los padres se encuentran calificados para decidir qué es lo mejor para sus hijos. Una hipótesis cuestionable cuando muchos de ellos no han terminado la escuela y subsisten en base a planes sociales. Esta nota proveerá ejemplos que ilustran lo erróneo de este preconcepto.

Nueva York, 1996: un grupo de filántropos crearon la New York Scholarships Foundation, la cual ofreció vouchers educacionales a 1,000 familias de bajos ingresos, pudiendo elegir entre cientos de escuelas privadas, religiosas o laicas. El interés fue masivo, los padres no desaprovecharon la oportunidad; más de 20,000 se inscribieron en una lotería para acceder a ellos. ¿El impacto? Notable, incrementándose un 31% el número de Afro-Americanos que accedieron a la universidad.

Montevideo, 2003: en Casavalle, uno de los barrios más pobres de la ciudad, abrió sus puertas el Liceo Jubilar, escuela privada, religiosa y gratuita, financiada mediante donaciones. Hoy sus primeros egresados están en la Universidad; 92 residentes de Casavalle asistieron en 2012 a la Universidad de la República, el 1% de los estudiantes de Montevideo.

La foto se repite una y otra vez; en 2013 comenzó a funcionar en el mismo barrio el Liceo Impulso, similar a Jubilar pero laico. Sus primeros 100 alumnos fueron sorteados entre 377 interesados. ¿El resultado? Para fin de año la deserción había sido nula al igual que la repetición. El interés creció considerablemente, postulándose 530 niños sobre un potencial de 1.215, para la promoción que dio comienzo este año.

En nuestro país, la pobreza del conurbano bonaerense nos provee otra nítida ilustración. En él la caída en la primaria estatal alcanzó en 2013 el 11%. ¿Por qué? Probablemente por decisiones de padres en búsqueda de un mejor futuro para sus hijos, ya sea sacrificándose para acceder a escuelas de gestión privada o cruzando la General Paz. Ello es consistente con la migración hacia escuelas públicas de la CABA, las cuales, reporta Silvia Montoya-Directora de Evaluación de la Calidad Educativa de la ciudad, reciben en promedio un 10% de sus estudiantes de la Provincia, alcanzando el 29% en la comuna 12, lindera al conurbano (Coghlan, Villa Urquiza, Saavedra y Villa Pueyrredón).

Los ejemplos son claros, en cada uno de ellos familias muy humildes toman decisiones en pos de una mejor educación para sus hijos. ¿Qué excusa hay entonces para cercenarles a los padres el poder de decidir qué tipo de escuela es la más adecuada para sus hijos?

Es claro que hablar de vouchers educativos es un tema tabú, a pesar que contribuirían a igualar oportunidades al permitir que todas las familias pudiesen elegir entre escuelas públicas y privadas, independientemente de sus posibilidades económicas.

Es hora de llevar a cabo una verdadera revolución educativa y atrevernos a considerar como una posibilidad digna de ser debatida la instrumentación de un sistema que otorgue a los padres el poder de decidir sobre la educación de sus hijos.

Es hora ya de terminar con el tabú.